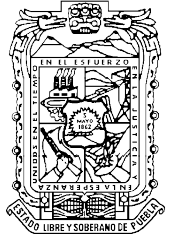




**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE PUEBLA**



PERIÓDICO OFICIAL

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES DE CARÁCTER OFICIAL SON
OBLIGATORIAS POR EL SOLO HECHO DE SER PUBLICADAS EN ESTE PERIÓDICO

Autorizado como correspondencia de segunda clase por la Dirección de Correos
con fecha 22 de noviembre de 1930

TOMO DXCVII	"CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA" MIÉRCOLES 29 DE ENERO DE 2025	NÚMERO 20 QUINTA SECCIÓN
-------------	--	--------------------------------

Sumario

**GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO**

ACUERDO del Ejecutivo del Estado, por el que crea el Programa
de Obra Comunitaria "Por Amor a Puebla".

GOBIERNO DEL ESTADO PODER EJECUTIVO

ACUERDO del Ejecutivo del Estado, por el que crea el Programa de Obra Comunitaria “Por Amor a Puebla”.

Al margen el Escudo del Estado de Puebla, con una leyenda que dice: Unidos en el Tiempo, en el Esfuerzo, en la Justicia y en la Esperanza. Estado Libre y Soberano de Puebla.

ALEJANDRO ARMENTA MIER, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Puebla, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en el Estado mexicano, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución, y en los tratados internacionales de los que sea parte el Estado mexicano, así como de las garantías para su protección, para lo cual todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Por su parte, el artículo 2° Apartado B fracción I de dicho ordenamiento dispone que es obligación de la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, establecer las instituciones y determinar las políticas públicas que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas y su desarrollo integral, intercultural y sostenible, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos, para lo cual, dichas autoridades deben, entre otras acciones, impulsar el desarrollo comunitario y regional de los pueblos y comunidades indígenas, para mejorar sus condiciones de vida y bienestar común, mediante planes de desarrollo que fortalezcan sus economías y fomenten la agroecología; reconociéndose la obligación de establecer a rango de Ley, los mecanismos que faciliten la organización y desarrollo de las economías de los pueblos y comunidades indígenas y reconocer el trabajo comunitario como parte de su organización social y cultural.

En ese tenor, el artículo 4° de la Constitución Federal establece la igualdad de la mujer y el hombre ante la Ley, y los derechos de toda persona a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; a la protección de la salud, para lo cual la Ley debe definir un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social; a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; a disfrutar de vivienda adecuada, para lo cual la Ley debe establecer los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar dicho objetivo.

Aunado a ello, de conformidad con el artículo 25 de la Constitución General de la República, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, fortalezca la Soberanía Nacional y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, así como la más justa distribución del ingreso y la riqueza, permitan el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de las personas, grupos y clases sociales, para lo cual al desarrollo nacional concurrirán, con responsabilidad social, los sectores público, privado y social, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación, debiendo la Ley, entre otras cosas, establecer los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social, de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente responsables.

Paralelamente, el artículo 26 Apartado A de la referida Carta Magna prevé que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.

En tanto que el numeral 134 de dicha Constitución establece la obligación de administrar los recursos económicos de que disponga la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, con eficiencia, eficacia,

economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, para lo cual los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las Entidades Federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos antes señalados.

Que la Ley de Planeación en sus artículos 1º fracciones II y III, señala que las disposiciones de dicha Ley tienen por objeto establecer las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática, para que el Ejecutivo Federal coordine las actividades de planeación de la Administración Pública Federal, y la participación de los gobiernos de las Entidades Federativas.

Que el artículo 2º de dicha Ley precisa que la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible para el país, con perspectiva de interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos en la Constitución Federal, y estará basada en el fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales en lo político, económico y cultural, en la igualdad de derechos entre las personas, la no discriminación, atención de las necesidades básicas de la población y mejoría, en todos los aspectos de la calidad de vida, para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población, en el equilibrio de los factores de la producción que proteja y promueva el empleo, en un marco de estabilidad económica y social, y en la perspectiva de género para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo.

Asimismo, el artículo 33 del mencionado ordenamiento establece la facultad del Ejecutivo Federal para convenir con los gobiernos de las Entidades Federativas, la coordinación que se requiera a efecto de que éstos participen en la planeación nacional de desarrollo, coadyuven en el ámbito de sus respectivas competencias, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para que las acciones a realizarse por dichas instancias se planeen de manera conjunta.

Que la Ley General de Desarrollo Social en su artículo 1 señala que dicha norma tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Federal, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social, establecer un Sistema Nacional de Desarrollo Social en el que participen la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, así como determinar las competencias de éstos en materia de desarrollo social y las bases para la concertación de acciones con los sectores social y privado, regular y garantizar la prestación de bienes y servicios contenidos en los programas sociales.

A la par el artículo 6 de dicho cuerpo legal estipula que son derechos para el desarrollo social la educación, salud, alimentación nutritiva y de calidad, vivienda digna y decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo, la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos establecidos en la Constitución Federal.

A su vez, los artículos 7, 8 y 9 de la mencionada Ley, aluden el derecho de toda persona a participar y a beneficiarse de los programas de desarrollo social, de acuerdo con los principios rectores de la Política de Desarrollo Social, y de toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja, correspondiendo a la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, en sus respectivos ámbitos de competencia, formular y aplicar políticas compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias, grupos sociales y, en su caso, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en situación de vulnerabilidad, destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables.

En ese sentido, el artículo 11 de la Ley General invocada dispone que la Política Nacional de Desarrollo Social tiene como objetivos propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así como la superación de la discriminación y la exclusión social, promover un desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore su distribución, y garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y control de los programas de desarrollo social.

También los artículos 14 y 16 de la Ley en cita, precisan que la Política Nacional de Desarrollo Social debe incluir, cuando menos, las vertientes de superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación

nutritiva y de calidad, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación, seguridad social y programas asistenciales e infraestructura social básica; teniendo los gobiernos de las Entidades Federativas la obligación de hacer del conocimiento público cada año sus programas operativos de desarrollo social, a través de los medios más accesibles a la población, en un plazo de noventa días a partir de la aprobación de sus presupuestos de egresos anuales respectivos.

Además, el artículo 41 del ordenamiento antes mencionado, refiere que las Entidades Federativas deberán instituir un sistema de planeación del desarrollo social, formular, aprobar y aplicar los programas de desarrollo social respectivos, en los términos fijados en las disposiciones aplicables y, de manera coordinada con la Federación, vigilar que los recursos públicos aprobados se ejerzan con honradez, oportunidad, transparencia y equidad.

Que el artículo 7 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla dispone que en el Estado de Puebla todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte, y en la propia Constitución del Estado, así como de las garantías para su protección.

Que el artículo 12 de la Constitución Local dispone que las leyes se ocuparán del desarrollo integral y el bienestar de las mujeres, la atención de la salud de los habitantes del Estado, la promoción de una vida adecuada que asegure el bienestar de las personas y la satisfacción de las necesidades de instrucción y alimentación de las niñas y los niños, proteger el derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible y la protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Que los artículos 13 y 16 de dicha Constitución señalan el deber del Estado y los Municipios de combatir cualquier práctica discriminatoria e impulsar el desarrollo integral y sustentable de los pueblos indígenas, mediante el establecimiento de instituciones y políticas enfocadas a impulsar el empleo de los indígenas y su contratación preferencial en las obras, programas y acciones institucionales que se realicen en las regiones indígenas, así como desarrollar proyectos específicos para la infraestructura básica y la construcción, ampliación y mantenimiento de vías de comunicación que beneficien directamente a las comunidades indígenas; correspondiendo al Estado promover y fomentar la producción de bienes y la prestación de servicios por los particulares o por sí mismo, en función del progreso social.

En dicho tenor, los artículos 107 y 108 de la Constitución Estatal disponen que en el Estado de Puebla se organizará un Sistema de Planeación del Desarrollo, el cual será democrático y se integrará con los planes y programas de desarrollo de carácter estatal, regional, municipal y especiales, constituyéndose como una obligación a cargo del Estado, el considerar la participación de los particulares y del sector social en todas las acciones a realizar para la elaboración y ejecución de los planes y programas de desarrollo; así como la relativa a que los recursos económicos de que disponga el Estado, los Municipios y sus Entidades, sean administrados con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a que estén destinados.

Que la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla en sus artículos 16 y 18 fracción I prevén que el Sistema Estatal de Planeación Democrática constituye el conjunto de procedimientos y actividades mediante las cuales las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, entre sí, y en colaboración con los sectores de la sociedad, toman decisiones para llevar a cabo de forma coordinada y concertada el proceso de planeación, a fin de garantizar el desarrollo integral del Estado; siendo que la organización y funcionamiento de dicho Sistema deberá orientarse a garantizar los elementos necesarios para el desarrollo integral y equilibrado del Estado, para lo cual se deberán asignar con perspectiva de género y respeto de los derechos humanos, las prioridades a los instrumentos del proceso de planeación atendiendo a un desarrollo social que satisfaga los derechos sociales de la población, garantizando el mínimo vital, la seguridad del individuo, el combate a la pobreza, la vivienda digna, la mejora de la calidad de vida, la protección de la familia, la integración social, la inclusión, el acceso a servicios de salud efectivos y la educación de calidad, atendiendo para ello el bienestar material y subjetivo de las personas.

Por su parte, los numerales 21 y 23 de tal ordenamiento aluden que el proceso de planeación se refiere al diseño, elaboración y vinculación de las acciones y recursos necesarios para la operación de los documentos derivados del Plan Estatal de Desarrollo, el cual comprende la planeación en sus diversos niveles.

Que el artículo 1 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla, establecen que dicha norma tiene por objeto garantizar, promover y proteger el cumplimiento de los derechos sociales de los habitantes del Estado, establecer las bases para lograr un desarrollo social integral, mediante la formulación, ejecución e instrumentación de programas, acciones e inversiones en materia de Desarrollo Social, así como establecer el Sistema Estatal de Desarrollo Social con los Municipios y fortalecer las relaciones de éstos, así como con los sectores social y privado para consolidar las bases de la coordinación de las acciones orientadas a la consecución de los objetivos, estrategias y prioridades de la Política Estatal de Desarrollo Social.

Que el artículo 4 de dicha Ley retoma como finalidades del desarrollo social el satisfacer las necesidades materiales básicas de la población, esencialmente en los ámbitos de alimentación, salud, educación, vivienda e infraestructura social, lograr la integración o reintegración de los grupos de población excluidos de los ámbitos del Desarrollo Social, el territorio, la familia o la comunidad, así como ofrecer servicios sociales adecuados a las necesidades de la población en su ámbito familiar y comunitario, que sean suficientes y de calidad.

En tanto que, los artículos 5 y 8 de esa misma ley prevén que la Política Estatal de Desarrollo Social deberá ser congruente con los Planes Nacional, Estatal y Municipales de Desarrollo, así como con los programas que deriven de ellos, a fin de impulsar el desarrollo de manera coordinada entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad; teniendo el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, la obligación de formular y aplicar, en sus respectivos ámbitos de competencia, políticas asistenciales que impulsen el desarrollo económico y social.

En dicho orden de ideas, los artículos 12 y 13 de la Ley Estatal invocada, señalan que la Política Estatal de Desarrollo Social comprende los programas, acciones, directrices, líneas de acción, enfocados a impulsar el Desarrollo Social en el Estado.

Que bajo tales premisas normativas, en Puebla se ha trazado una ruta de consolidación de la política social que se sigue por parte del Gobierno Federal, por ello se busca ser un factor más activo en impulsar el desarrollo y bienestar en el sector más desfavorecido de la sociedad poblana, con el firme objetivo de reducir la pobreza, la marginación y todos los elementos que inciden en el rezago social que los pone en franca desventaja ante los embates de la vida.

Que el Gobierno del Estado sustenta la visión Pensar en Grande, Por Amor a Puebla, donde cada acto de Gobierno, debe ser consciente que el objetivo a seguir es promover acciones basadas en el humanismo mexicano y la bioética social.

Que el Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Bienestar, de conformidad con los artículos 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, tiene como objeto, entre otros, ejecutar y evaluar las políticas de bienestar y estrategias para el combate a la pobreza, en beneficio de grupos o familias en situación vulnerable o de marginación rural o urbana del Estado, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal competentes de manera eficaz, eficiente, congruente y de acuerdo a la planeación del desarrollo económico y social del Estado.

Que el Estado de Puebla tiene el cuarto lugar a nivel nacional con personas que viven en situación de pobreza, conforme a la medición 2024 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); 54.0% se encuentra en situación de pobreza, y el 11.4% en pobreza extrema.

De dichos estudios, se puede inferir que el tipo de obras y servicios requeridos por la población en circunstancias de alta marginación como consecuencia de la pobreza en que se encuentran, deberán ser en respeto a sus usos y costumbres, implementando políticas públicas que promuevan su bienestar social e incidan en el cuidado, protección de sus recursos naturales, así como en el fortalecimiento de su riqueza comunitaria que directamente permita el desarrollo sustentable del Estado, siempre con el sentido del Humanismo Mexicano; el fortalecimiento de la cohesión social mediante el asambleísmo y su fortalecimiento en la rectoría económica y social; todo con el propósito de atender la pobreza extrema, la marginación y el rezago social mediante el acceso equitativo y humano a este programa y sus beneficios.

Que el Gobierno del Estado de Puebla tiene como objetivo impulsar políticas públicas a través de programas sustentables, que vayan dirigidos directamente a combatir la distribución desigual de los ingresos, la marginación económico-social, la falta de oportunidades de estos sectores y la desigualdad.

Que es de vital importancia la coordinación entre el Gobierno del Estado de Puebla y las comunidades donde se apliquen las políticas públicas para reducir la pobreza, la marginación y el rezago social, pues este desafío no se logrará sin esta coordinación, así debe impulsarse el desarrollo inclusivo y participativo para generar bienestar, mejores condiciones de vida y reducir la brecha de desigualdad existente en este sector de poblanas y poblanos.

Lo anterior colocará al Estado en cumplimiento con los compromisos internacionales de México para el desarrollo, así como lo establecido en la Agenda de Desarrollo 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible; particularmente, en los objetivos 1. Fin de la Pobreza, 2. Hambre Cero, 3. Salud y Bienestar, 6. Agua Limpia y Saneamiento, 7. Energía Asequible y No Contaminante, 10. Reducción de las Desigualdades, 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles y 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas; en específico, la meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.

Que para hacer realidad la visión del Estado “Por Amor a Puebla”, es prioridad del Gobierno del Estado de Puebla, trazar una política social donde se materialice el verdadero sentido del humanismo mexicano, atendiendo como verdaderos derechos humanos los derechos a la educación, el acceso al agua y su saneamiento, a contar con una vivienda digna, que la población marginada tenga acceso a la salud, que los servicios básicos cuenten con una cobertura lo más amplia posible, incidiendo en favor de la calidad de vida de los grupos vulnerables dentro de un contexto de bienestar social.

Que las características geográficas del Estado inciden en una diversidad de desarrollo y su nivel de marginación, por ello se debe atender a dicho sector de acuerdo a su ubicación geográfica, por lo que las políticas sociales dirigidas a su atención, deben ser trazadas conforme a la necesidad específica, de ahí que en zonas urbanas o semiurbanas, es necesario elevar su nivel de incorporación a los sectores productivos y competitividad mediante la construcción, mantenimiento y mejora o ampliación de la infraestructura de servicios públicos y la relacionada con la productividad a través de la capacitación de los beneficiarios como recurso humano valioso para el desarrollo de cualquier sociedad.

En cuanto a zonas rurales se requieren acciones continuas desde la perspectiva social y económica para superar sus rezagos mediante una política social coordinada que permita superar los niveles educativos, de vivienda, de salud, de nutrición y de ingresos familiares entre otros, así como un impulso firme y sostenido de las actividades agropecuarias y comerciales, mediante la tecnificación del campo y modernización de las prácticas productivas y la capacitación continua de los productores.

Que es compromiso del Gobierno del Estado impulsar políticas sociales que permitan combatir el rezago social y mejorar las condiciones de vida de la población en condiciones de marginación extrema, mediante la aplicación de recursos que permitan realizar obras o acciones de infraestructura social y productiva, que sean ejecutadas conjuntamente entre el Estado y los beneficiarios con un verdadero sentido humano y que dignifique la vida de las poblanas y los poblanos tanto en el sector rural como en el urbano.

Que en razón de lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1, 2 Apartado B fracción I, 4, 25, 26 Apartado A y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracciones II y III, 2 y 33 de la Ley de Planeación; 1, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16 y 41 de la Ley General de Desarrollo Social; 1, 7, 12, 13, 16, 28, 70, 81, 82, 83, 107 y 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, 3, 5, 6, 31 fracciones I, II, III, VIII, X, XIV, 32, 33, 34, 39, 41 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 16, 18 fracción I, 21 y 23 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla; 1, 4, 5, 8, 12 y 13 Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla, he tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO DEL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE CREA EL PROGRAMA DE OBRA COMUNITARIA “POR AMOR A PUEBLA”

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo es de observancia general y obligatoria en el Estado de Puebla y tiene por objeto crear y establecer el funcionamiento del Programa de Obra Comunitaria “Por Amor a Puebla” (en lo sucesivo, el “Programa”).

ARTÍCULO SEGUNDO. El “Programa” tiene por objeto constituir un instrumento de política pública de participación e integración comunitaria multicultural, con enfoque de bioética social, humanismo mexicano y de política social destinado a combatir y erradicar la pobreza, marginación, desigualdad, vulnerabilidad y rezago social

de la población en los sectores urbano, semiurbano y rural, atendiendo a sus causas estructurales, así como generar el desarrollo social inclusivo que permita la construcción de una sociedad con mayor equidad y justicia social, garantizar el acceso y disfrute de los derechos sociales y el bienestar de la sociedad, mediante el fomento a la participación amplia, informada y activa de la sociedad en sus diversas manifestaciones y modalidades, así como la atención de sus necesidades, su integración social y comunitaria, y el respeto a los usos y costumbres de los pueblos y comunidades originarios y afromexicanas.

ARTÍCULO TERCERO. Para la consecución de dicho objeto, el “Programa” tendrá como Objetivos Específicos:

I. Atender y focalizar acciones de obra comunitaria en las Zonas de Atención Prioritaria Rurales, Semi Urbanas y Urbanas en el Estado;

II. Incrementar la cobertura de los servicios de salud, educación, alimentación, vivienda e infraestructura social básica, a fin de mejorar las condiciones de vida de las y los habitantes de las comunidades en condiciones de pobreza, marginación, vulnerabilidad y rezago social;

III. Generar infraestructura social básica necesaria para la satisfacción de las necesidades sociales de las comunidades en los Municipios del Estado;

IV. Garantizar el acceso y disfrute de los derechos sociales, combatir y erradicar la desigualdad social a través del acceso equitativo e inclusivo a oportunidades;

V. Optimizar la eficiencia de los recursos públicos destinados a la ejecución de obras, mediante el aprovechamiento del capital social y la participación comunitaria a través de sus diferentes manifestaciones y modalidades;

VI. Fomentar el desarrollo de las capacidades productivas de las comunidades, promover la generación de empleos e impulsar el crecimiento económico de las localidades y comunidades rurales, semiurbanas y urbanas en el Estado, mediante la ejecución de obras sociales comunitarias para la edificación y mejoramiento de la infraestructura rural y urbana en beneficio de la sociedad;

VII. Promover la integración de los Comités para el Bienestar como mecanismos de participación comunitaria, observando la incorporación de la bioética social y humanismo mexicano, la perspectiva de género y los enfoques de interculturalidad e interseccionalidad, con el fin de que por conducto de éstos se realicen intervenciones multisectoriales e interinstitucionales focalizadas en el desarrollo de obras o acciones que las comunidades definan como prioritarias, y

VIII. Promover la participación de la mujer en las decisiones comunitarias y su integración a los Comités para el Bienestar, su incorporación a las Mesas Directivas de los mismos en sus diversos cargos, y como beneficiarias del “Programa”, bajo el principio de perspectiva de género y el acceso igualitario a la gestión y beneficios de las obras y acciones del “Programa”.

ARTÍCULO CUARTO. La Secretaría de Bienestar del Estado de Puebla es la Dependencia encargada de ejecutar el “Programa”, y para tal efecto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Coordinar las acciones para la instrumentación, desarrollo, operación, seguimiento y vigilancia del “Programa”;

II. Coordinar las acciones que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal deban ejecutar, en su ámbito de competencia, para el cumplimiento del objeto del “Programa”;

III. Considerar como componentes básicos complementarios al “Programa”, proveer beneficios sociales esenciales a toda la población y fomentar las actividades productivas de las comunidades;

IV. Emitir las Reglas de Operación, Lineamientos y demás disposiciones necesarias para el cumplimiento del objeto del “Programa”, y

V. Las demás establecidas en el presente Acuerdo y las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO QUINTO. Para la ejecución del “Programa” se conformará un órgano colegiado denominado “Comisión Intersecretarial para el Bienestar”, cuya integración, competencia y funcionamiento se regirá en los términos previstos en las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO SEXTO. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal deberán prestar la asistencia técnica que le sea requerida por la Secretaría de Bienestar para el cumplimiento del objeto del “Programa”.

ARTÍCULO SÉPTIMO. La Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración deberá realizar, en su ámbito de competencia y de conformidad con las disposiciones aplicables, los ajustes presupuestales necesarios para cumplir con el objeto del “Programa”.

ARTÍCULO OCTAVO. La Secretaría de Infraestructura priorizará aquellas obras públicas y servicios relacionados con las mismas trazadas por la Secretaría de Bienestar para el cumplimiento del objeto del “Programa”, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Mismo caso aplicará para la Secretaría de Salud, tratándose de atención médica preferente en beneficio de grupos vulnerables, salud visual y auditiva, para el cumplimiento del “Programa”.

Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaría de Bienestar podrá remitir a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, competentes, aquellas solicitudes que requieran atención prioritaria por su propia y especial naturaleza.

ARTÍCULO NOVENO. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno cumplirá, de acuerdo con sus facultades, con la atención al correcto funcionamiento del “Programa”.

ARTÍCULO DÉCIMO. El “Programa” se podrá articular con otras acciones y programas de gobierno para cumplir con los Ejes, Objetivos, Propósitos y Líneas de Acción que se derivan de la Plataforma y Visión de Gobierno en los “Compromisos por Amor a Puebla”; en específico, en el punto 7 denominado “Programa Integral de Bienestar Comunitario”, así como a la Planeación Nacional y Estatal vigente, coadyuvando así a un enfoque integral de la política de desarrollo social.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Las personas servidoras públicas de la Administración Pública Estatal, participarán, previo calendario que para tal efecto emita la Secretaría de Bienestar, en las jornadas comunitarias de apoyo a la ejecución de las obras validadas del “Programa”.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. La documentación que sea utilizada por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, durante el ejercicio fiscal vigente, con motivo de la ejecución del “Programa”, deberá considerar la inclusión de manera clara y explícita de la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones de naturaleza y jerarquía similar que se opongan al presente Acuerdo.

Dado por duplicado en la Sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil veinticinco. El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Puebla. **CIUDADANO ALEJANDRO ARMENTA MIER.** Rúbrica. El Secretario de Gobernación. **CIUDADANO JOSÉ SAMUEL AGUILAR PALA.** Rúbrica. El Secretario de Bienestar. **CIUDADANO JAVIER AQUINO LIMÓN.** Rúbrica. La Secretaria de Planeación, Finanzas y Administración. **CIUDADANA JOSEFINA MORALES GUERRERO.** Rúbrica. El Secretario de Infraestructura. **CIUDADANO JOSÉ MANUEL CONTRERAS DE LOS SANTOS.** Rúbrica. El Secretario de Salud. **CIUDADANO CARLOS ALBERTO OLIVIER PACHECO.** Rúbrica. El Secretario de Anticorrupción y Buen Gobierno. **CIUDADANO ALEJANDRO ESPIDIO REYES.** Rúbrica.